

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	BYRON GIL GARCÍA
DEMANDADOS	COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.
RADICADO	05001-31-05-010-2019-00613-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Ineficacia del acto de traslado de régimen pensional
DECISIÓN	Confirma

Medellín, cinco (05) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, procede a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **BYRON GIL GARCÍA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y la **AFP PROTECCIÓN S.A.**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 034**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir los recursos de apelación interpuestos por los apoderados judiciales de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. contra la sentencia que profirió el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 16 de mayo de 2022; y a su vez conocer dicha sentencia en Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, de conformidad al artículo 69 del CPT y SS.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que el demandante, quien nació el 4 de febrero de 1960, se afilió al régimen de prima media con prestación definida administrado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales desde abril de 1986; posteriormente, en diciembre de 2001, se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de la AFP PROTECCIÓN S.A., donde permanece actualmente.

Se duele que los asesores ejecutivos del RAIS no le brindaron la información suficiente para haber tomado la decisión pertinente con la información determinante y ajustada a su situación concreta; y que, al contrario, le ocultaron información relevante al momento de ser atendido para afiliarse a PROTECCIÓN S.A., por lo que considera que su decisión se encuentra viciada y afectada en su validez, por ausencia del conocimiento sobre las consecuencias jurídicas de su traslado de régimen pensional.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se declare la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad adelantado por PROTECCIÓN S.A., y que en consecuencia, se ordene a dicha administradora trasladar a COLPENSIONES el valor de los aportes recibidos con motivo de la afiliación del demandante a esa administradora, incluidos los rendimientos financieros,

debiendo ordenar a esta última entidad recibir dichas sumas y aceptar al demandante en el régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad, condenando a las demandadas a reconocerle las costas procesales del juicio.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo las demandadas_a descorrer el traslado de esta acción.

COLPENSIONES, a través de la contestación allegada (PDF 5 del expediente digital), se opuso a la prosperidad de las pretensiones de esta acción; aceptó los hechos de la demanda referidos a la edad del demandante y las afiliaciones a prima media y a ahorro individual, así como el agotamiento de la reclamación administrativa, y; propuso las excepciones perentorias que denominó *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y FALTA DE CAUSA PARA PEDIR LA INEFICACIA O NULIDAD DE TRASLADO, AUSENCIA DE PRUEBA DE ENGAÑO, EQUIVOCADA INFORMACIÓN Y PERJUICIO PADECIDO, PRESCRIPCIÓN, BUENA FE, COBRO DE LO NO DEBIDO, IMPOSIBILIDAD DE CONDENAR EN COSTAS, COMPENSACIÓN y PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS”*.

PROTECCIÓN S.A. descorrió el traslado de la acción, según se observa en el PDF 4 del expediente digital. A través de dicha respuesta negó los hechos de la demanda, salvo la afiliación, traslado y edad, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y, formuló las excepciones perentorias que denominó *“Inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, Buena fe, Prescripción, Aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones y la Innominada o genérica”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 16 de mayo de 2022, el Juez de conocimiento accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a través de PROTECCIÓN S.A., y le impuso la obligación de trasladar a COLPENSIONES, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutora de la sentencia, el saldo de la cuenta de ahorro individual del actor, incluidos los rendimientos, el bono pensional si lo hubiere, los porcentajes del fondo de garantía de la pensión mínima, gastos de administración, seguros previsionales y de primas de reaseguros, con la respectiva indexación de los descuentos y con la discriminación y pormenorización de todos los conceptos devueltos, especificándolos por su valor y características.

A COLPENSIONES le ordenó aceptar el retorno del demandante, recibir las mencionadas sumas, activar su afiliación a prima media sin solución de continuidad, actualizando su historia laboral y continuar siendo su administradora de pensiones.

Condenó en costas procesales únicamente a PROTECCIÓN S.A., absteniéndose de hacerlo frente a COLPENSIONES.

El principal argumento del A quo para declarar la ineficacia, desarrolló toda la tesis jurisprudencial que en la actualidad sostiene la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, sobre la inversión de la carga de la prueba, la insuficiencia del formulario para acreditar asesoría, la relevancia de la oportunidad en que se reciba la asesoría, la imposibilidad de que la ineficacia se sanee por prescripción o por traslados en el mismo régimen de ahorro individual con solidaridad y el derecho a la libre selección de régimen pensional.

VI. – RECURSOS DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sentencia de primera instancia fue apelada por los apoderados judiciales de COLPENSIONES y de PROTECCIÓN S.A.

Apelación de PROTECCIÓN S.A: Recurrió la decisión de manera parcial, oponiéndose al traslado de las cuotas de administración y las primas previsionales, a efecto de los cual solicitó la revocatoria de la decisión en esos aspectos. Argumentó que estos rubros son descuentos previamente establecidos y autorizados por el legislador en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, reseñó que esos descuentos existen en ambos regímenes pensionales y en el expediente obra el certificado respectivo que acredita los significativos rendimientos que percibió el asegurado a partir de la correcta administración de la cuenta de ahorro individual con solidaridad por parte de PROTECCIÓN S.A. Adujo que la condena a devolver cuotas de administración y primas previsionales constituye un enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES, ya que estaría recibiendo unas comisiones que no están destinadas a financiar la pensión de vejez del asegurado y al mismo tiempo estaría recibiendo los rendimientos financieros de la cuenta de ahorro individual del demandante, lo que a su juicio impone concluir que PROTECCIÓN S.A. se encuentra en el derecho de conservar esas sumas como restitución mutua del caso.

Citó el Decreto 2555 de 2010, a efectos de destacar la vigilancia que ejerce la Superintendencia Financiera sobre la entidad, y destacó conceptos emitidos por dicha entidad en los que, citando la normatividad respectiva, ha reseñado que en los traslados de régimen pensional debe ser trasladada la cuenta de ahorro individual, los rendimientos financieros y los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima.

Finalmente adujo que las cuotas de administración y las primas previsionales son sumas que se causan periódicamente, por lo que estarían

sometidas a la prescripción extintiva, teniendo en cuenta además que no están llamados a financiar la pensión de vejez.

Apelación de COLPENSIONES: Su disenso se refirió a toda la sentencia, destacando que no puede existir ineficacia del acto de traslado, ya que el actor suscribió el formulario de manera libre y voluntaria. Solicitó que se ordene la integridad de las cotizaciones realizadas por el demandante bajo la condición de que se mantenga el equilibrio y equivalencia del ahorro. Solicitó se adicione la sentencia en este aspecto y que no se le imponga condena en costas a la entidad por esta solicitud, teniendo en cuenta que estima que es pertinente en aras de salvaguardar la sostenibilidad financiera de la entidad.

Alegatos de Conclusión:

En la oportunidad procesal correspondiente, la Dra. Kelly Yiseth Holguín Serna, con TP. Nro. 238.479 del Consejo Superior de la Judicatura, allegó sustitución de poder que la acredita como apoderada judicial sustituta de COLPENSIONES. Esta sala le reconoce personería jurídica amplia y suficiente para representar los intereses de la entidad. A su vez, presentó alegatos de conclusión, a través de los cuales solicitó modificar y revocar la sentencia de primera instancia, en cuanto, a su juicio la activa no alcanzó a acreditar los supuestos fácticos que ameriten la declaratoria judicial de ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad. Reprocha de la sentencia el que hubiere dado aplicación a la inversión de la carga de la prueba y que hubiere relevado a la parte actora de realizar la actividad probatoria pertinente. Añadió que no puede considerarse a los afiliados como la parte débil de la relación contractual, y solicitó se tenga en cuenta el principio de sostenibilidad financiera en favor de COLPENSIONES, como persona de derecho público ajena al hecho de la ineficacia.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión.- La Ineficacia en el traslado de régimen pensional.-

El objeto central de esta Litis, se extiende a los puntos objeto de inconformismo planteados por los apoderados judiciales de PROTECCIÓN S.A y COLPENSIONES en sus respectivos recursos de apelación, sin embargo, esta Sala se encuentra facultada para revisar todos los aspectos de la condena a Colpensiones relacionada con la declarada ineficacia de traslado de régimen pensional y la aceptación del demandante en el régimen de prima media con prestación definida que administra, en virtud de la competencia de que se dispone conforme al artículo 69 del CPT y SS., en Grado Jurisdiccional de Consulta.

Partirá la Sala de establecer si el traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, que realizó el demandante, a través de la AFP PROTECCIÓN S.A. alcanzó o no a producir los efectos jurídicos respectivos.

Sea lo primero referir que la libre escogencia de régimen pensional y el traslado entre regímenes que en tal virtud se efectúe, tiene como presupuesto esencial, el absoluto conocimiento del asegurado sobre las consecuencias jurídicas que se puedan derivar del cambio de régimen pensional, el cual ha de venir suministrado y garantizado por el agente adscrito al respectivo fondo, esto es, es de la propia esencia del acto de traslado, el suministro cabal y absoluto

de toda la información, incluyendo el asesoramiento sobre todas las implicaciones pensionales y consecuencias que para el caso concreto pueden darse, ya que se trata de una decisión relevante de la cual depende el futuro pensional del asegurado.

Esto lleva a la Sala a advertir que las obligaciones de asesoría no fueron creadas por el Legislador a través de recientes normas, sino que desde la propia concepción dualista de dos regímenes pensionales a través de la Ley 100 de 1993, se establecieron como de su propia esencia.

Así, la asesoría a cargo de la administradora, se erige en una obligación insoslayable, teniendo en cuenta la trascendencia e importancia de los efectos económicos que puede representar una decisión de tal naturaleza.

En términos generales, es preciso referir que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha venido desarrollando la tesis sobre la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, y a través de las sentencias SL 1452 del 3 de abril de 2019 y SL 1688 del 8 de mayo de 2019, ha consolidado su línea jurisprudencial, la cual venía desarrollándose –en su orden- a través de las Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017, decantando que el deber de información es ineludible; que este tema a nivel procesal se rige por condiciones probatorias que le imponen a la respectiva administradora de pensiones acreditar en el juicio que en cada caso concreto sí adelantó la respectiva asesoría; que el primer acto de voluntad es el que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se hubieren brindado a los asegurados, después de haber tomado la decisión inicial; que la simple suscripción de un formulario de traslado no denota un proceso serio y cabal de asesoría; no es necesario ni que el asegurado se encuentra ad portas de consolidar el derecho pensional, ni que necesariamente tenga que tener el

beneficio del régimen de transición, y; que la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrada la formación del derecho a la pensión.

Es importante destacar que, el primer acto de voluntad que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se le brinden al asegurado, después de haber tomado la decisión inicial, o por el hecho de que el asegurado se haya trasladado incluso entre varias administradoras pertenecientes al régimen de ahorro individual con solidaridad, ya que *“la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad, por lo que un dato será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad”* (Sentencia CSJ SL 1688 de mayo de 2019).

A partir de lo anterior, pasa a desatarse la alzada conforme al...

CASO CONCRETO

Sea lo primero reseñar, que conforme a la prueba documental obrante en el PDF 2 del expediente digital, se comprueba que el señor BYRON GIL GARCÍA, se afilió al régimen de prima media con prestación definida administrado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales desde abril de 1986; posteriormente, en diciembre de 2001, se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de la AFP PROTECCIÓN S.A., donde permanece actualmente.

Ahora, revisadas en detalle las consideraciones del A quo para arribar a la decisión de declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional del actor, esta Sala encuentra que las mismas se encuentran ajustadas al sentido de la jurisprudencia nacional, y consultan las particularidades del caso, teniendo en cuenta que la AFP convocada a juicio (PROTECCIÓN S.A.) no alcanzó a probar haberle brindado asesoría al actor con suficiencia en su proceso de traslado, en el momento en que lo atendió para afiliarlo.

Como lo ha decantado pacíficamente la jurisprudencia del órgano de cierre (Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017), es claro que la firma del formulario de afiliación no es una prueba certera de que hubiere existido un verdadero cumplimiento por parte de los fondos privados. La simple firma del formulario por parte del asegurado no puede tenerse como una prueba de que se le haya informado a cabalidad de todos los pormenores que le implicaban el cambio de régimen, y por ello el acto jurídico terminó afectado en su eficacia.

Es importante destacar que el derecho a la libre elección de régimen pensional contenido en la Ley 100 de 1993 en el marco del derecho a la seguridad social no riñe con las disposiciones legales que contemplan la exigencia del formulario, debiéndose entender que, más allá de la documentación formal, existe un sustrato material directamente relacionado con los derechos fundamentales que exige que el asegurado tenga una completa asesoría en su proceso de traslado de régimen pensional, la cual coloca a la respectiva administradora en el pleno del cumplimiento de sus obligaciones profesionales en ese sentido, bajo la dinámica del *“buen consejo”*.

El apoderado judicial de COLPENSIONES insistió en la validez de la afiliación del demandante a PROTECCIÓN S.A., haciendo referencia al transcurso del tiempo que el asegurado perteneció al RAIS, sin embargo, esa sola circunstancia no es indicativa de que efectivamente al asegurado se haya brindado la correcta y suficiente información. También hizo referencia al hecho de que la simple firma del formulario constituiría una razón suficiente para dar cuenta de la validez del acto de afiliación.

Esta sala no encuentra consistentes esos argumentos, ni advierte que los mismos tengan entidad suficiente para revocar la declarada ineficacia que se efectuó en primera instancia.

En consecuencia, **se confirmará** la sentencia de primera instancia, al haber declarado la ineficacia del traslado del señor BYRON GIL GARCÍA dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad.

Bajo el anterior escenario, la situación pensional del demandante, retorna al mismo estado en que se encontraba antes de suscribir el acto ineficaz de traslado a la AFP PROTECCIÓN SA., esto es, se encuentra válidamente afiliado al RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA, administrado en la actualidad por COLPENSIONES.

El tema de las devoluciones económicas es pertinente revisarlo en virtud de la competencia en Grado Jurisdiccional de Consulta de que dispone este colegiado, que impone la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad pública codemandada que será quien asuma las futuras prestaciones económicas de la seguridad social que deban pagársele al demandante. A su vez, este tema constituye punto de disenso en la apelación de PROTECCIÓN S.A. y de COLPENSIONES, aquella entidad haciendo énfasis en que tales descuentos se encuentran establecidos y autorizados por el legislador en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, existen en ambos regímenes pensionales, compensan la correcta administración de la cuenta de ahorro individual adelantada por PROTECCIÓN S.A., evidenciándose un enriquecimiento sin causa de ser trasladados, existiendo el derecho de conservar esas sumas como restitución mutua a la generación de rendimientos, siendo prescriptibles e incluso prohibidas retornar en virtud de los pronunciamientos de la Superintendencia Financiera. Por su parte, COLPENSIONES solicitó se adicione la sentencia de primera instancia, debiéndose ordenar que se dé la equivalencia del traslado de recursos, permitiéndole a la entidad pública salvaguardar la sostenibilidad financiera del sistema.

Esta sala encuentra que a ninguno de ambos apoderados les asiste razón en sus recursos. No se acogerán esos argumentos y se mantendrá la orden de traslado en los términos ordenados por el A quo, en aplicación de la jurisprudencia de la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, que ha

estimado que los efectos de la ineficacia deben tener un efecto integral sobre el valor de las cotizaciones y aportes, sin que pueda entenderse que se está generando un enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES.

Las órdenes dadas por el A quo se justifican desde el punto de vista de que a la entidad pública co demandada COLPENSIONES, debe garantizársele la integridad de la cotización sin descuento alguno, ya que será quien reciba la afiliación del asegurado y para todos los efectos legales lo tenga afiliado al fondo público sin solución de continuidad.

Si bien, el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 establece la facultad que tienen las administradoras de descontar los gastos de administración y demás descuentos, ello opera en el marco de un traslado que no adolezca de ineficacia, esto es, que se trate de una pertenencia al régimen legítima que no sea ineficaz. Así, en actos jurídicos que conserven su validez y se hayan realizado en condiciones ordinarias con la garantía del buen consejo, el acompañamiento y la asesoría, es evidente que dichos descuentos pueden realizarse y no existiría lugar a devolverlos. No obstante, mientras el acto sea ineficaz, se encuentra justificado el retorno económico global de todo lo que se hubiere generado en virtud de ese acto que no nació a la vida jurídica.

Los efectos de la ineficacia se traducen en el hecho de que las cosas deban retornar al estado anterior, resultando intrascendente que el actor haya percibido unos rendimientos financieros a partir de la gestión administrativa de PROTECCIÓN S.A., en tanto COLPENSIONES no tiene por qué ver diezmada la cotización, ya que los referidos descuentos también existen en el régimen de prima media con prestación definida, y no deben ser realizados por PROTECCIÓN S.A., sino por COLPENSIONES, que es donde siempre ha permanecido afiliado el actor.

Al respecto, resulta oportuno citar el reciente criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien, en sentencia del 29 de julio de 2020, SL 2877, Radicación 78.667, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, ha recordado que *“la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta*

de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida...”.

Respecto a la prescripción de estos rubros, al ser derivados de una obligación periódica y no tener un carácter financiador de la pensión futura del actor, es evidente que el fenómeno extintivo no se ha configurado, teniendo en cuenta que es solo a partir de esta sentencia que se está declarando e imponiendo la obligación de devolución.

En punto a las manifestaciones del apoderado judicial de COLPENSIONES, no le asiste razón en su solicitud de que se adicione la sentencia de primera instancias debiéndose ordenar la equivalencia de los aportes, ya que el A quo ha sido consecuente con el principio de la sostenibilidad financiera de la entidad, al autorizar el retorno integral de las respectivas sumas, con la indexación incluida y con una equivalencia que lleva incluida la actualización monetaria, por ende, no se afecta el principio de sostenibilidad financiera.

En consecuencia, **se confirmará** íntegramente la sentencia de primera instancia.

En cuanto a la solicitud que hizo el apoderado judicial de COLPENSIONES, en el sentido que no se condene en costas procesales a la entidad por no haber hecho parte del negocio jurídico que se declaró ineficaz, esta sala impondrá a la entidad costas procesales, no porque hubiere tenido alguna responsabilidad en la ineficacia del acto, sino por haber salido vencida en el recurso de apelación, lo cual impone que se imponga el criterio objetivo del artículo 365 del Código General del Proceso.

COSTAS PROCESALES DE SEGUNDA INSTANCIA

En esta instancia se han causado costas procesales, a cargo de PROTECCIÓN S.A y de COLPENSIONES, por resultar vencidas en los respectivos recursos de alzada, y en favor del señor BYRON GIL GARCÍA. Agencias en derecho: un (1) salario mínimo legal mensual vigente para 2022, correspondiéndole a cada una de dichas entidades la mitad del mismo.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente la sentencia de primera instancia, de fecha y procedencia conocidas, que se conoce en Apelación y Consulta, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas procesales de segunda instancia a **PROTECCIÓN S.A** y a **COLPENSIONES** y en favor del señor **BYRON GIL GARCÍA**. Agencias en derecho: un (1) SMLMV para 2022, distribuable en un 50% a cargo de cada una de dichas entidades, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

CUARTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada